

AMBIGÜEDAD DE LAS NUEVAS ELECCIONES PRESIDENCIALES



Tras el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, se reinician los procesos electorales en 1982 con la elección de los diputados constituyentes. Desde entonces se han dado elecciones presidenciales en 1984, de diputados y alcaldes en 1985 y nuevamente de diputados y alcaldes en 1988. Para marzo de 1989 están programadas unas nuevas elecciones presidenciales, que hasta cierto punto cierran el ciclo iniciado en 1982, si es que se da la transmisión del poder al candidato ganador. Con ello no sólo se habría consolidado el proceso electoral después de cinco comicios distintos, sino que se habría legitimado un nuevo ordenamiento político, de suerte que fuera de él no cabría legitimidad alguna.

Esta es la tesis de los demócratas-electoralistas. No hay democracia sin elecciones libres y hay democracia siempre que haya elecciones no fraudulentas. Ahora bien, en El Salvador se ha consolidado ya el proceso de alcanzar el poder por medio de elecciones libres y no fraudulentas y, por tanto, se puede hablar de un país fundamentalmente democrático, en el que ya no habría razón para golpes de estado y, menos aún, para movimientos revolucionarios, que por la violencia pretendieran alcanzar el poder. Se reconoce que faltan matices para poder hablar de una democracia total y plenamente establecida, pero lo fundamental ya se ha logrado con la reiteración normalizada de los procesos electorales. Tan es así que hasta la Convergencia Democrática, conjunto de partidos, afín al FDR, ha visto posibilitada su presencia y se ha decidido a tomar parte activa por primera vez desde 1982 en unas elecciones presidenciales. La participación masiva del pueblo en los distintos procesos electorales, a pesar de las amenazas y aun de los ataques del FMLN, muestran la validez de las elecciones al ser el camino elegido mayoritariamente por el pueblo para darse a sí mismo sus legisladores y gobernantes. Como resultado de todo ello pueden apreciarse claros avances en el fortalecimiento de las libertades democráticas (libertad de expresión, libertad de manifestación y de organización, etc.), en el respeto de los derechos humanos, en el desescalamiento de la radicalización y de la polarización.

La tesis de los demócratas-revolucionarios es opuesta a la anterior. Todo este proceso arranca de un golpe de estado, que pretendió contrarrestar el avance de la revolución, lo cual prueba que no toda toma de poder por vía no electoral es ilegítima, como fue el caso de la Democracia Cristiana y de Duarte en el período 80-82. Las elecciones para diputados constituyentes en 1982 se hicieron en condiciones totalmente irregulares: no se presentaron a ella ni se podían presentar más que partidos de derecha y se llevaron a cabo en plena guerra civil y en medio de la matanza terrorista de miles de salvadoreños partidarios del FMLN; más aún, esas elecciones fueron primordialmente una parte del proyecto contrainsurgente, promovido por Estados Unidos para terminar con el movimiento revolucionario, ya que las apariencias democráticas son las que permiten y posibilitan el que el Congreso



norteamericano envíe ingentes cantidades de ayuda militar para combatir a la guerrilla, la cual hubiera tomado el poder sin esa ayuda. Si la gente acude a votar en regular número, hay que tener en cuenta que lo hace presionada y por miedo a represalias o por sacar ventajas muy inmediatas, además de que se da un gran número de abstenciones, que muestran la poca fe de la gente en los procesos electorales; aun, entre quienes van a votar, se encuentran muchos que lo hacen más por rutina o por la imposición de la propaganda que por honda convicción. Finalmente ya se ha visto que las elecciones no han traído la democracia ni la solución a los grandes problemas del país. Sigue la miseria y la injusticia estructural, sigue la guerra, sigue la violación de los derechos humanos, se ha acrecentado la falta de soberanía y la dependencia de Estados Unidos, el poder civil está en lo fundamental sometido al poder militar y nunca en las actuales condiciones se respetaría un triunfo electoral de la izquierda y ni siquiera una plena actividad política de un FMLN desprotegido de sus armas.

Estas dos posiciones tan contrapuestas muestran la complejidad de los procesos electorales, que ni son la pieza fundamental real de la actual situación salvadoreña ni tampoco pueden despreciarse como algo sin ninguna transcendencia. Los procesos electorales han tenido y tienen una cierta potencialidad política en El Salvador, la cual puede ser orientada hacia la democratización y la pacificación, pero tienen también una cierta potencialidad orientada a encubrir ideológicamente posiciones claramente antiprogresistas y guerrerristas.

1. Breve análisis de los procesos electorales de 1982 a 1988

En 1982 el gobierno de Estados Unidos juzga haber llegado el momento oportuno para pasar de una Junta de Gobierno de facto, tras el levantamiento del 15 de octubre y del pacto Fuerza Armada-Democracia Cristiana, a una nueva Constitución, que normalice el proceso político de El Salvador. Los no menos de 25.000 asesinatos perpetrados en el tiempo de las Juntas (1980-1982), la necesidad de deslegitimar al FMLN-FDR y de crear condiciones para un gran aumento en la ayuda militar a la Fuerza Armada en su lucha contra el movimiento revolucionario, forzaban a entrar por el camino consuetudinario de las elecciones. Poco importaba que no se dieran condiciones para unas elecciones y, menos aún, para la elaboración de una nueva constitución, dado el estado de guerra y de terror, que vivía el país. Era imperioso salir de la provisionalidad y buscar a posteriori una legitimación de algo, que ya se estaba haciendo y que se pretendía seguir haciendo: combatir por todos los medios la posibilidad de un triunfo revolucionario.

Los resultados de esas elecciones mostraron de momento dos cosas: primera, que no era difícil convocar un gran número de electores, no obstante la oposición del FMLN-FDR y, segunda, que los electores rechazaban en buen número la propuesta norteamericana, que propiciaba un triunfo de Duarte, como su aliado mejor. Aunque los resultados fueron inflados (el CCE contabilizó cerca del millón y medio de votos, cuando el número de urnas y el tiempo disponible no permitían el acceso a las urnas de más de un millón cien mil votantes), se trató de un número muy importante de votantes. Por otro lado, los votos fueron



mayoritariamente hacia la coalición derechista y esto no fué respetado ni por Estados Unidos ni por la Fuerza Armada, que obligaron a un gobierno de coalición nacional y vetaron la candidatura del mayor D'Aubuisson como presidente provisional. Todo ello demuestra el carácter interesado de las elecciones y el poco respeto del resultado de las mismas. Se quería potenciar la guerra y se sometió el proceso electoral a este propósito.

En 1984 se tienen elecciones presidenciales y a ellas acude un número mayor de votantes, un millón quinientos mil, que representaban entonces el 60% de los absolutamente posibles y el 80% de los realmente posibles. Sobre ese millón y medio hubo 113,559 votos entre nulos y abstenciones. Esto vuelve a mostrar el hecho innegable de un gran número de salvadoreños desesos de votar, no obstante la oposición al voto del FMLN-FDR. El hecho no es fácil de explicar. Ni significa un entusiasmo por los procesos electorales, desmentido por las encuestas, ni significa tampoco que las masas de votantes lo hagan inducidas por el temor a las represalias. Significa, más bien, un fenómeno complejo, en el que intervienen la tradición electoral, siempre alta en el país, a pesar de los fraudes evidentes en el pasado; la presión de la paropaganda a través de un uso masivo e intensivo de los medios de comunicación, el intento de hacer algo por cambiar las cosas, la afiliación partidista que promete buenos dividendos y cierta convicción de que las elecciones son parte importante de la democracia. Pero la evidente y confesada ingerencia de Estados Unidos para favorecer el triunfo de Duarte sobre D'Aubuisson demuestra el verdadero sentido de estas elecciones en el proyecto contrainsurgente norteamericano. No se quiere primariamente seguir la voluntad popular expresada en elecciones libres no fraudulentas, sino situar como presidente a aquel, que se acomode mejor al proyecto norteamericano. Con D'Aubuisson parecía más difícil mantener las reformas, que supuestamente se orientaban a frenar el apoyo popular al movimiento revolucionario, y, sobre todo, parecía más difícil conseguir el apoyo del Congreso norteamericano para financiar el proceso bélico contrainsurgente, orientado a terminar con el poder militar del FMLN.

Las elecciones de 1985 fueron de diputados. Esta vez los votantes alcanzaron la cifra de un millón cien mil votantes con novecientos sesenta y cinco mil votos válidos. Se redujeron los votos, respecto de las anteriores elecciones presidenciales, pero esto es normal en la historia electoral de El Salvador. Lo interesante de esta elección es que el PDC cobra mayoría absoluta en la Asamblea, con lo cual se encuentra idealmente en óptimas condiciones para gobernar con un apoyo de más de medio millón de votantes. Pues bien, a pesar de estar en tal situación durante tres años, no va a poder hacer nada importante para resolver los problemas del país ni para poner en práctica lo prometido. Esto se debe no sólo a la dificultad del problema o a la incapacidad y corrupción de muchos miembros del partido, sino a que las elecciones no dan el poder real en El Salvador. Ni siquiera con un ejecutivo monolítico, presidido por un líder teóricamente carismático y popular, apoyado por la mayoría de la Asamblea, se pudo hacer contrapeso adecuado al proyecto norteamericano, a la Fuerza Armada y al poder capitalista. Una vez más se iba a demostrar que las elecciones, aun sin haber en ellas fraude manifiesto, no son capaces de establecer un

proceso democrático y no son suficientes para resolver la crisis del país.

Así se va a reconocer implícitamente en las elecciones de 1988, donde de nuevo se dan elecciones de diputados, equivalentes a las tenidas en 1985. Los votos válidos vuelven a estar en torno a novecientos treinta mil y el total de votantes vuelve a ser aproximadamente de un millón ciento cincuenta mil, aunque no debe desestimarse el incremento que debiera haberse dado por los nuevos votantes con derecho al voto, calculables por razones demográficas en unos doscientos mil. Pero de todos modos, lo significativo en estas elecciones no es el menor número relativo de votantes o el mayor número de votos no-válidos, sino el vuelco en la preferencia de los electores. Ciertamente no debe dejarse desatendido el hecho de que sólo fueron votos válidos el 56.4% de los que habían sacado el carnet electoral, el 47.7% de los empadronados y el 41.4% de los votantes posibles. Pero, más importante aún, es ver que por ARENA votan, en 1988, 447.696, frente a los 286.665 de 1985 y por el PDC votan, en 1988, 326.716, frente a los 505.338 de 1985, con lo que la DC pierde la mayoría en la Asamblea, que pasa a manos de ARENA, así como la mayor parte de las alcaldías. Esto supone, que una gran segmentación de la población toma en serio las elecciones, que una buena porción de ese segmento condena la gestión de la Democracia Cristiana en el Ejecutivo, en el Legislativo y en las Alcaldías, y que con su voto quiere cambiar la situación. La crisis económica parece ser el factor determinante en este cambio, así como la pésima imagen del partido gobernante, centrado en la gestión y el voluntarismo de Duarte. La mayor parte de los votantes no parece darse cuenta de que lo malo, no es tanto la gestión de los gobernantes, como lo malo del proyecto. Y así como en 1984 y en 1985 pretendió cambiar de gobernantes en favor del PDC, en 1988 pretende hacerlo en favor de ARENA, sin poner en cuestión el fondo del proyecto contrainsurgente.

2. Balance de los procesos electorales

Los procesos electorales, tal como estaba previsto, han traído ventajas al proyecto contrainsurgente. El Salvador ha ido cambiando su imagen exterior y hoy se le considera por muchos como un país fundamentalmente democrático, al que se le debe ayudar; consiguientemente, se pretende considerar que carece ya de razón estar ayudando al movimiento guerrillero, pues ya es posible conquistar el poder e imponer el proyecto político propio a través del trabajo político no violento. El Salvador habría decidido en elecciones mayoritarias que no desea la guerra ni los métodos violentos para alcanzar el poder. El gobierno salvadoreño estaría en pleno derecho de pedir a Estados Unidos ayuda militar, con la que llevar a cabo una guerra defensiva en favor de la democracia. El mundo debe despreocuparse de lo que ocurre en El Salvador, pues ya pasaron las horas negras del terrorismo de estado, y, más bien, debe preocuparse de contener los ataques terroristas del FMLN. El Congreso norteamericano puede dar todo el dinero necesario para la guerra, pues lo que estaría haciendo con éllo es consolidar un proceso democrático. Quedan cosas por hacer, pero no se puede dudar de la intención de hacerlas y de que se están poniendo los medios adecuados para realizarlas.



¿Han traído los procesos electorales algunos bienes al proceso político de El Salvador? La respuesta es afirmativa, si es que se subraya el "algunos bienes" y si se analizan también los males que han originado.

Como bien, puede estimarse el que se hayan decidido a expresar su opinión e incluso su voluntad más de un millón de ciudadanos, que en términos realmente posibles suponen bastante más del 50% de los ciudadanos con derecho al voto. Como bien, puede estimarse el que se haya hecho un esfuerzo serio por sanear el proceso electoral, reduciendo en un alto grado la posibilidad de fraude. Como bien, puede estimarse el que se haya acrecentado la conciencia colectiva, especialmente en el caso de los militares, de que se deben respetar los resultados de las urnas, de modo que se dificulte más el cuartelazo y el golpe de estado. Como bien, puede estimarse que se haya ampliado la libertad de expresión y de organización, de modo que resulte posible la entrada en acción pública de partidos de izquierda, no obstante las dificultades reales, en que todo ello se desarrolla. Como bien, puede estimarse que se de la posibilidad real de rechazar aquellos gobernantes y legisladores, que lo estén haciendo mal y/o contra el deseo de la mayoría. Como bien, puede estimarse que las elecciones den un poco más de poder real a los elegidos y que se vaya iniciando un proceso, cuyo final podría ser el asegurar al poder civil el puesto que le corresponde, según la constitución. Como bien, puede estimarse que algunos partidos, especialmente ARENA, en su inicio propensos a los métodos violentos, se hayan visto obligados a cambiar su imagen e incluso parcialmente su realidad, desechando del primer plano a los personajes y a las propuestas, que eran realmente extremistas en la violación de los derechos humanos, en los planteamientos políticos y en los planteamientos económicos y sustituyéndolos por figuras, que pueden representar una línea más moderada y modernizante. Como bien, puede estimarse que se ponga un mayor cuidado oficial en respetar la ley y en disminuir lo que pudiera llamarse terrorismo de estado, práctica usual y predominante en el período 1980-1982. Como bien, pueda estimarse finalmente una mayor politización de amplios sectores del país, cada vez más al tanto de los problemas y de los distintos puntos de vista.

Pero con estos bienes han venido otros males. Centrada la solución en el espejismo de las elecciones y de los partidos políticos, se han encubierto o empeorado otras situaciones, ya de por sí sumamente graves y sumamente antidemocráticas. Parecería que poco importara la guerra, la violencia y la falta de paz, con tal de que se de la democracia electoral. Parecería que poco importara una permanente y sistemática violación de los derechos humanos. La pérdida de la soberanía y su entrega cada vez mayor en manos de Estados Unidos, la militarización creciente del país, no sólo en el sentido de una quintuplicación de la Fuerza Armada que consume una gran parte de los recursos nacionales, sino en el sentido de constituirse cada vez más en un poder político mayor y más autónomo; el empeoramiento permanente de la situación de la mayor parte del pueblo salvadoreño hasta llegar a niveles de pobreza antes nunca vistos cuantitativa y cualitativamente; la existencia práctica de dos poderes, que aun sin ser equivalentes en su fuerza, hacen que se obstaculice notablemente la marcha del país y que se de la debida tranquilidad a los ciudadanos; la inseguridad de que nada de lo

conseguido esté consolidado, sino que siga estando a merced de la presencia moderadora de Estados Unidos; la imposibilidad manifiesta de enjuiciar a los responsables de las pasadas masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y aun de las que se siguen dando en el presente, sobre todo si de ellas son responsables elementos de la Fuerza Armada; el desprestigio de los partidos políticos, unos considerados como corruptos e incompetentes, otros como asesinos u ocultadores de asesinatos, secuestradores y escuadrones de la muerte, que se aprovechan de su paso por el poder en beneficio propio; el espectáculo de una Asamblea Legislativa, dedicada o a legislar en provecho de los partidarios propios o a perderse en minucias, que para nada tocan los problemas más graves del país... Todo esto es algo, unas veces disimulado y otras promovido bajo la apariencia de un sistema democrático, confundida la democracia con el ejercicio periódico de unas elecciones no fraudulentas.

Tenemos con ello que los procesos electorales, buenos en sí y que han traído algunos bienes, no lo son tanto, si se toma en cuenta el proyecto global en el que se inscriben y del que reciben su realidad y significado últimos. En El Salvador se ha sustituido el esquema guerra (represión)-reformas con el esquema guerra (represión)-elecciones, donde el acento principal no está en las reformas o en las elecciones, sino en la guerra. Lo que se sigue buscando por Estados Unidos, por la Fuerza Armada, por el gran capital y aun por la mayor parte de los partidos políticos no son las reformas, que pudieran, traer una situación justa a la mayoría de los salvadoreños, ni elecciones en las que realmente se expresara la voluntad popular, sino el aniquilamiento del movimiento revolucionario o su domesticación manejable. De lo cual no se sigue que las reformas o las elecciones sean malas en sí, ni siquiera estas reformas y estas elecciones, que de algún modo han introducido cambios positivos en el proceso político salvadoreño, sino que son, desde luego, insuficientes y, además, corren el peligro de ser perjudiciales, si se convierten en el pretexto decisivo para terminar con el conflicto social y militar por la vía de las armas. Ni las reformas ni las elecciones han sido suficientes, no sólo para terminar con la guerra, sino, ni siquiera, para debilitar el movimiento revolucionario, aunque, tal vez, hayan logrado contener la velocidad de su avance. Y han sido el gran pretexto para dificultar un proceso serio de negociación, que es el que podría llevar a finalizar la guerra y a democratizar profundamente el proceso político con inclusión de las reformas y de las elecciones.

Las reformas y las elecciones no han dado, por ejemplo, al presidente Duarte en todo su período ni el apoyo popular, ni la autoridad, ni el poder suficientes para empezar a resolver los grandes problemas del país y, sobre todo, para poder negociar. Obnubilado por la legitimidad recibida del proceso electoral y sin percatarse del carácter casi puramente apariencial de la democracia actual, engañado sobre las verdaderas características de su poder presidencial, no ha podido enfrentar el problema de la negociación. Ciertamente no se lo ha hecho fácil el FMLN, pero esto no obsta a que deba reconocerse el engaño fundamental, al que puede llevar la caracterización de una democracia desde el punto de vista de los procesos electorales.



3. Las nuevas elecciones presidenciales de 1989

Hay quienes piensan que la repetición ordenada y sistemática de los procesos electorales acabarán trayendo una verdadera democracia a El Salvador, y con ella la paz. Otros, con peor voluntad, piensan que las elecciones son el mejor sistema para que no puedan llegar al poder las fuerzas progresistas y revolucionarias, que nunca contarán con los recursos propagandísticos y financieros necesarios para poder convencer a la mayoría de las ventajas de su proyecto histórico. Son éstos los que están contentos con la participación de Convergencia Democrática en los próximos comicios presidenciales. Esa participación demostrará, según ellos, dos cosas: la legitimidad de un proceso, abierto a las fuerzas progresistas y, junto a ello, la poca base popular de los partidos de izquierda. ¿Qué objetar a unas elecciones y a una situación política, que permite y aun anima a los partidos de izquierda a participar y a demostrar su poder en las urnas? La respuesta puede buscarse proponiendo la cuestión de otra forma: ¿qué pasaría si en unas elecciones libres ganara una coalición de izquierda, la cual propusiera como objetivo principal la paz alcanzada mediante la negociación con el FMLN-FDR, la recuperación de la soberanía nacional, el castigo a los responsables de los escuadrones de la muerte y de los masivos asesinatos, la drástica reducción de la Fuerza Armada y su sumisión total al poder civil y un programa económico dirigido directamente en favor de las mayorías populares? La respuesta es clara: el resultado de esas elecciones no sería respetado, sea por violentación de las urnas, sea por presión a tal gobierno para que por prudencia no se atreviera a cumplir con lo prometido, sea finalmente por un golpe de estado con el pretexto consabido de que se está violando la Constitución y de que se está favoreciendo el comunismo.

Vistas así las cosas, se aprecian mejor los límites de los procesos electorales en El Salvador y, desde luego, los límites de las nuevas elecciones, aunque en ellas participen por primera vez desde 1977 partidos progresistas. La presente campaña electoral lo demuestra.

Ante todo, pueda asegurarse que sólo los partidos con grandes recursos económicos están en capacidad de conseguir un alto número de votos. Todo se fia a la propaganda y la propaganda resulta cada vez más cara. No significa esto necesariamente que baste con disponer de suficientes recursos económicos para triunfar en las elecciones, pero sí significa que sin suficientes recursos económicos no se pueden ganar unas elecciones de ámbito nacional. Terrible limitación, si se quiere seguir hablando de democracia. Los paliativos ofrecidos por la deuda política no son remedio para este mal. Este es uno de los puntos más débiles de Convergencia Democrática y de otros partidos en la presente campaña, pues con esa limitación se podrá saber quiénes son los que actualmente están a su favor, pero no quiénes lo están potencialmente y a los que, sin embargo, no pueden llegar con su mensaje y a quienes sí pueden llegar sus adversarios con toda suerte de desinformación.

En segundo lugar, la campaña de quienes tienen más dinero, ARENA y PDC



(dinero de la empresa privada, dinero venido del extranjero o recursos sacados de la cuota de poder administrativo, con que se cuenta), muestra que no se busca iluminar la voluntad popular sino, más bien, forzarla ciegame. Apenas hay espacio para discutir problemas y plantear soluciones. La mayor parte del esfuerzo se centra en convencer de que no se vote por el otro, haciendo ver que sus programas y sus hombres son malos, en vez de propugnar que se vote por uno, porque los programas y los hombres que lo llevarán a cabo son buenos. Uno de los modos principales de propaganda es el uso y abuso de caricaturas insultantes, de spots simplificados, de musiquillas pegajosas. Se busca decir al pueblo lo que se piensa que éste quiere oír, no lo que le pudiera convenir más sino lo que pueda engañarle mejor, no lo que cada partido y grupo de presión va a hacer, cuando esté en el gobierno, sino lo que por el momento se vende mejor.

La vieja cuestión de la imagen y de la realidad se presenta aquí con toda crudeza. El marketing político maneja imágenes y las más de las veces elude la realidad. Si, por ejemplo, D'Aubuisson da mala imagen como presidente, se elige otro candidato de mejor imagen, a sabiendas de que en realidad lo que se busca es llevar adelante los intereses, que están bajo la apariencia del que da mala imagen. Si lo que se pretende es que los intereses empresariales queden asegurados, nunca se dirá esto, si no que las grandes mayorías serán las favorecidas. La crítica de unos a otros ayuda a ver las limitaciones reales de cada partido, pero no es tanto crítica de realidad y de fondo sino crítica de apariencia y de imagen. La verdad es que, en el fondo, no se dan diferencias sustanciales entre los dos partidos, que se disputan el primer puesto en la realidad de los programas económicos o de los programas políticos para finalizar con la guerra (dos de los puntos claves), aunque esto no obsta a que deban preverse puestas en práctica distintas, según sea uno u otro el partido triunfador. Pero quien no conociera la realidad del país y atendiera tan sólo a lo que dicen estos dos partidos, tendría serias dificultades para descubrir diferencias en esos dos puntos fundamentales, lo cual demuestra lo engañoso de la campaña. ARENA se ha ido más al centro y el PDC se ha ido más a la derecha, con lo que la confusión aumenta, si no se va más allá de lo que la campaña propagandística va mostrando. Quizá en etapas posteriores se entrará más al fondo de las cuestiones y de los programas, pero siempre con la tremenda limitación de las múltiples dependencias y limitaciones de una campaña presidencial, en la que no se está proponiendo nada radicalmente nuevo.

Ultimamente el PDC ha vuelto a recuperar su lenguaje de que representa el medio entre las dos extremas, la extrema derecha de ARENA y la extrema izquierda del FMLN, superando así el error de su plataforma, que divide al país entre quienes simpatizan con el FMLN y quienes no están de acuerdo con el movimiento revolucionario. ARENA, sin embargo, sigue manteniendo que el PDC es, en definitiva, un partido, que acabará aliándose o dando paso al FMLN-FDR. Pero aun así, las posiciones explícitas de uno y otro sobre los grandes problemas nacionales siguen todavía sin diferenciarse notablemente, poniendo en entredicho sus formulaciones generales.

Y aquí se presenta otro punto descubridor de la falsedad del proceso.



Nadie dice sincera y concretamente lo que va a hacer y lo que no va a poder hacer. Porque, aunque el propósito fundamental es el de conseguir el mayor número de votos posible, ha de tenerse gran cuidado en no molestar a los poderes fácticos, sin cuya venia no se pueden ganar las elecciones o no se podrá gobernar. Por ejemplo, aunque la población deseara mayoritariamente llegar a la paz por la vía de una negociación inmediata con el FMLN-FDR, ninguno de los partidos con esperanza razonable de triunfo, se atrevería a introducir tal proposición en su propaganda política, cuanto menos en su programa efectivo de acción. Al proponer tal cosa, todos los demonios de la imagen y de la propaganda caerían sobre el atrevido, que aparecería como comunista y favorecedor de que los comunistas llegaran al poder. Pero es que, además, tal oferta supondría ganarse el desfavor y aun la hostilidad de Estados Unidos, de la Fuerza Armada y del capital. Y con tal oposición, creada con la debida propaganda, ni se pueden ganar las elecciones, ni se puede llegar al poder, ni se puede gobernar. No se busca lo que sería realmente mejor para la mayoría, ni siquiera se pretende indagar qué es lo que desea la mayoría, sino que se dirige todo a alcanzar el poder para llevar adelante determinados intereses, precisamente aquellos intereses que a un partido le han hecho poderoso. Los partidos electoralmente débiles son precisamente aquellos que, por no ser los mejores representantes de intereses poderosos, carecen de la fuerza necesaria para llevar adelante proyectos, más acordes a las necesidades reales de las mayorías que a los intereses de las minorías.

Considerado todo ello, ha de decirse que las próximas elecciones por sí solas no traerán solución a los mayores problemas del país, ni siquiera aportarán por sí solas algo nuevo, en que poner esperanzas de superar la crisis. Véanse, si no, los posibles escenarios.

Un triunfo de ARENA en la primera vuelta, no le daría a ese partido un poder suficiente para salirse del proyecto fundamental norteamericano, cuyo eje principal es derrotar o debilitar radicalmente al FMLN, al que Estados Unidos considera el único oponente real de sus intereses en El Salvador. ARENA preferiría entrar de lleno a una guerra total, no excluida la guerra sucia de los escuadrones de la muerte, en contra del FMLN y de quienes supone son sus aliados y colaboradores. Preferiría también remediar las reformas estructurales, de modo que el capital y el capitalismo salieran robustecidos y recuperados. Limitaría también las libertades políticas, eso sí, ateniéndose a unas leyes dictadas a su favor. Pero, aunque esas sean sus preferencias, poco de ello podrá realizarlo, al menos, si no convence a Estados Unidos de que esa es la forma más rápida y menos costosa de terminar con el FMLN. Ahora bien, es difícil vender al Congreso norteamericano la necesidad de matar a otros cien mil salvadoreños para terminar con el comunismo, cifra simbólica, que suelen proponer personajes importantes de ARENA. La reiteración del genocidio supondría serias dificultades para conseguir la ayuda militar y económica sin las cuales no se puede debilitar y tal vez ni siquiera contener al FMLN. Es decir, se estaría proponiendo algo que va contra el interés principal de Estados Unidos y que, por tanto, no tiene viabilidad. Consecuentemente tampoco podría ser aceptado por la Fuerza Armada, dependiente al máximo del apoyo norteamericano, el cual no puede darse fácilmente sin la imagen de constitucionalidad y de respeto a los derechos humanos, que los jefes militares consideran como



valores que no pueden violar, aunque, según confesión de algunos de sus jefes principales, eso les causa dificultades en la conducción de la guerra. Un triunfo de ARENA en la segunda vuelta tendría que hacer concesiones mayores, lo cual dificultaría aún más la consecución de un poder civil monolítico en los tres órganos del estado. No es que deba desdeñarse la acumulación de poder, que supondría la alianza estrecha del capital, del poder político, de los medios de comunicación con cierta simpatía potencial de la Fuerza Armada. Pero aun esa acumulación no es suficiente para romper los marcos y la capacidad de presión de Estados Unidos y de la Fuerza Armada, por lo cual nada cambiaría en lo fundamental a corta distancia, a no ser que dispusiera o permitiera otra cosa la administración Bush. La posición de ciertos sectores de ARENA contra la guerra de baja intensidad y la propuesta de guerra total y guerra sucia, ya experimentadas en El Salvador con más de cincuenta mil civiles asesinados, y su manifiesta oposición a todo tipo de negociación con el FMLN apuntan a un peligro real de retroceso en lo político, en lo económico y en los derechos humanos, lo cual no debe descartarse por completo. Mas tal tendencia, por fuerte que sea todavía en ARENA, podría ser neutralizada, dada la necesidad de una buena imagen y debido a la presión norteamericana.

Un triunfo de la Democracia Cristiana en la primera vuelta tampoco traería cambios notables. Con ese triunfo quedaría más facilitado el proyecto norteamericano, en cuanto éste iba a encontrar menores dificultades en la forma para irse implantando, mientras que quedarían más dificultados los excesos extremistas en la cuestión de los derechos humanos, de la guerra y de las libertades políticas (en la cuestión macroeconómica no se darían grandes diferencias, en un primer momento al menos, entre el PDC y ARENA, si es que se atiende a su propaganda electoral, centrada en la "economía social de mercado"). De ahí que sea Chávez Mena el candidato preferido por Estados Unidos, aunque no habría, como lo hubo en 1982 y 1984, un rechazo absoluto al candidato de ARENA. Pero esto no le debe llevar al FMLN a la convicción de que para el movimiento revolucionario es mejor el triunfo de Cristiani que el de Chávez Mena, lo cual parece ser su posición actual. Y no le debe llevar porque con Cristiani ni se iban a agudizar las contradicciones ni se iba a llegar a un rompimiento con la ayuda norteamericana y si se iba a hacer más difícil la negociación, si es que ésta recibiera el visto bueno de Bush.

Un triunfo de Chavez Mena en la segunda vuelta podría ofrecer alguna pequeña novedad. Pequeña, porque se daría dentro del marco impuesto por los poderes fácticos, pero novedad al cabo, si para ese triunfo se han tenido que hacer concesiones a los otros partidos políticos, en especial a Convergencia Democrática, PCN, MAC y AD, más inclinados a la solución política negociada que ARENA. Con ello no sólo se evitaría la concentración del poder político (del ejecutivo, del legislativo y del judicial) en manos de la extrema derecha, que lo aprovecharía para fortalecer aún más el poder del capital frente al derecho del trabajo, sino que se robustecerían las posibilidades de un planteamiento más moderado y más democrático, en el que se irían abriendo y consolidando los espacios políticos y se facilitaría un arreglo político negociado con el FMLN-FDR, si es que el plan de Bush para Centroamérica entrara finalmente en la línea de las soluciones negociadas, que están



predominando actualmente en el mundo entero. Si tal triunfo supusiera una radicalización de la extrema derecha, desesperada por haber vuelto a perder una oportunidad, que cree tenerla ya en sus manos, habría llegado la ocasión de terminar con la arrogancia, los excesos y la impunidad de unas minorías, que confían más en la violencia de los escuadrones de la muerte, cuando no pueden disponer del terrorismo de Estado, que en el buen uso de lo que representan como fuerza social, que dispone de la mayor parte de los recursos económicos de la nación. Si, al contrario, tal triunfo fuera aceptado por la extrema derecha, quizá se pudiera llegar a un consenso nacional, poco propicio al FMLN a primera vista, pero que en un contexto centroamericano nuevo no tendría que ser necesariamente desfavorable.

Desde este punto de vista, es importante la posición que vaya a tomar definitivamente el FMLN ante las elecciones. El FMLN considera que los procesos electorales, tal como se han dado en El Salvador, tienen poco valor democrático y, sobre todo, son parte importante del proyecto contrainsurgente norteamericano. Esto es verdad, según lo vemos mostrando en este editorial, y es una verdad importante, por cuanto toca a fondo algunas de las debilidades y oscuridades de las elecciones. Mas no es toda la verdad. Las elecciones son eso, pero no son solamente eso. En parte ya lo ha visto así el FMLN, cuando no se ha opuesto tajantemente a que se presente a ellas CD. El FDR ha convencido al FMLN que los procesos electorales permitan de forma importante concientizar políticamente al pueblo y que lo que se puede perder por avalar de algún modo un proceso, que es parte integrante del proyecto contrainsurgente, se puede ganar mostrando las debilidades del mismo y aprovechando la oportunidad para sembrar la idea de la necesidad de un nuevo consenso nacional y de un proceso de negociación. También las reformas, los derechos humanos, los espacios políticos, la libertad de expresión, etc. son parte del proyecto contrainsurgente, pero no por ello son algo malo en sí, sino que son algo de lo que se ha podido sacar provecho en favor del proceso y en favor del pueblo salvadoreño. El FMLN haría mal en dar a las elecciones un valor que no tienen, como si las elecciones excluyeran la negociación, que como tal reconoce una cierta legitimidad al FMLN. En las elecciones, por otra parte, no obstante que muchos (las encuestas dan cifras superiores al 40%) piensan que tienen cierto margen de fraude, se expresa el sentir, al menos provisional, de más de un 50% de la población adulta con derecho a voto. Y esto debe ser respetado a la hora de buscar una solución democrática para El Salvador. El FMLN tiene razón al afirmar que las elecciones en El Salvador no son prueba fehaciente y definitiva de democracia por múltiples razones. Esto es suficiente para mantener su línea fundamental. Pero el FMLN no puede evitar que haya elecciones y que se de una presencia masiva de electores, lo cual muestra su debilidad política y también su debilidad militar. Esto debe ser aceptado sin desesperación y enfrentado de manera política y no militar. El combate militar contra ellas está llamado al fracaso y al descrédito. El pueblo verá otra vez que estas elecciones no traen la solución a la guerra y esto es lo único, que necesita probar el FMLN. Lo contrario aleja más las posibilidades de negociación, que es uno de los medios principales de la estrategia del FMLN. Cuanto más se oponga a las elecciones, los contrarios del FMLN verán en ellas una especie de plebiscito en contra del movimiento revolucionario y de la lucha



armada, lo cual de nuevo dificulta la negociación y el proceso democratizador.

Lo importante es que las elecciones no lleven a engaño. Si se las toma como un elemento más del proceso salvadoreño, que ni justifica como democrática la situación actual ni es capaz de resolver los problemas del país, no representan un mal sin bien alguno. Ciertamente es peligroso que llamen a engaño y distraigan de la verdad de los problemas del país, entre otras razones porque consumen meses y meses de la actividad política en constantes e inútilmente prolongadas campañas propagandísticas. Para las elecciones de diputados se consumieron más de dos meses en 1988 y para las presidenciales prácticamente otros seis meses en ese mismo año, además de los otros tres meses que se consumirán en 1989. Y lo que de bueno tendrían esos procesos para discutir la verdadera realidad de los problemas del país (punto que lo realizan bien algunos medios de comunicación masiva), lo tienen de malo por lo que suponen de confusión y de engaño. Cuánto más eficaz en este sentido fue el Debate Nacional organizado por la Iglesia, donde las bases sociales expusieron reflexivamente sus puntos de vista, sin que estos hayan sido tomados muy en cuenta por los partidos políticos mayoritarios.

Hay poderosas razones para dudar de que el sistema electoral, tal como se realiza en El Salvador y dadas las condiciones estructurales y coyunturales del país, sea la mejor forma de expresar la voluntad popular y, mucho menos, la mejor medida del grado de democracia y de participación popular, que serían idealmente exigibles. Pero, por otra parte, según las encuestas, cerca de un 80% desea participar en ellas. Y éste no es un dato desdeñable. Nunca tantos pueden estar confundidos por tanto tiempo. Pero esa participación -lo muestran asimismo las encuestas- es en muchos sabiamente escéptica: sirvan de algo, les permite cierta actividad política decisoria, pero no confían mucho en su efectividad. Ni siquiera se puede pedir cuentas a los políticos triunfadores de las promesas insatisfechas. ¿Qué se ha logrado, por ejemplo, de lo ofrecido por el presidente Duarte en la campaña de 1984? ¿Qué se ha logrado de lo ofrecido por ARENA en la campaña para diputados de 1988? Poco, muy poco. Lo mismo sucederá con esta campaña presidencial de 1989. En ella se disputa una cierta cuota de poder, de ella pueden esperarse más o menos facilidades y dificultades para la pacificación y el progreso del país, según sea el ganador. Pero todo ello en pequeña medida. Los ofrecimientos son como de quien puede realizarlo todo, como de quien va a tener en sus manos las riendas de la marcha del país. Esta presunción es equivocada. En las elecciones salvadoreñas se juega una cuota de poder importante, pero no se gana la totalidad del poder, ni siquiera la totalidad del poder político.

Mas las elecciones se van a seguir dando y, por ello, es menester utilizarlas, en la medida de lo posible, en favor de las mayorías populares.

31 de diciembre de 1988